

**EXPEDIENTE N°98-0045-CA
VOTO N° 127-98**

SENTENCIA N° 067-98. Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las dieciseis horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Javier Roca Vallejo, Vicepresidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad denominada EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS S.A., contra la resolución N° RES-DV-046-97 del día 01 de octubre de 1997 emitida por el Lic. Gerardo Bolaños Alvarado, en su condición de Director General de Aduanas.

RESULTANDO:

- I- Que mediante declaración aduanera N° 307126 con fecha de aceptación 06 de octubre de 1996 de la Aduana Central, la agencia aduanal Intermar tramita el despacho a consumo de 72 tambores conteniendo “cloro para piscinas”, clasificados en la posición arancelaria 2828.90.90.00. (véase folio N° 7).
- II- Que durante el proceso de verificación el funcionario aduanero modificó la clasificación arancelaria solicitada por la agencia de aduanas en la posición arancelaria 3808.40.90.00, conforme el análisis del Laboratorio Aduanero N°2328 del 23 de octubre de 1996. (véase folio N° 7).
- III- Que mediante escrito s/n de fecha 10 de diciembre de 1996, el señor Javier Roca Vallejo, en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad “Equipos y Accesorios Recreativos S.A.” , presenta formal reclamo administrativo por error en la clasificación arancelaria en la declaración número 307126 de la Aduana Central solicitando se verifique la correcta clasificación, de estimarse oportuno se

realice nuevo exámen en el laboratorio y se ordene el reintegro de lo pagado de más. (véase folios N° 1 a 6).

- IV- Que por oficio N° OFIC-SS-AC-71-97 emitido doblemente con fechas 20 de febrero y 29 de abril de 1997 los señores Ricardo Cervantes M. en su condición de Técnico de Operaciones Aduaneras 1 y el Lic. Daniel Arias T., Jefe de la Sección de Supervisión, Departamento Técnico de la Aduana Central, deniegan lo solicitado por considerar que en la partida 38.08 se clasifican productos tales como el Hipoclorito de Calcio que no sea totalmente puro, requisito indispensable de la partida 28.28 .Indican que por no ser totalmente puro, se acepta la presentación a granel. (véase folios N° 15,16).
- V- Que por escrito de mayo 8 de 1997 el recurrente presenta Recurso de Reconsideración y Revisión Jerárquica e incidente de nulidad, contra el acto dictado por la Aduana Central. (véase folios N° 17 a 21).
- VI- La Aduana Central dicta la resolución N° 732-AC-97 del 23 de mayo de 1997, manteniendo lo actuado por la Aduana, admite el recurso de revisión jerárquica ante el Director General de Aduanas y emplaza a la parte para ante el superior. (véase folios N° 60,61).
- VII- La Dirección General de Aduanas dicta la resolución RES-DV-046-97 del 01 de octubre de 1997, declarando sin lugar el recurso de revisión interpuesto, confirma la clasificación arancelaria determinada por la Aduana en la declaración aduanera N° 307126. (véase folios N° 62 al 69).
- VII- Por escrito N° DR-926-97 del 16 de octubre de 1997, el recurrente interpone recurso de apelación contra la resolución RES-DV-046-97, dentro del plazo conferido al efecto, argumentando lo siguiente: (véase folios N° 71 al 74).

- a- Manifiestan que durante la tramitación de este procedimiento administrativo se ha ofrecido abundante prueba para demostrar que la modificación arancelaria efectuada por el funcionario aduanero es errónea, y a pesar de todo se pretende mantener a un alto costo patrimonial.
- b- La mercancía solicitada a despacho consiste en “cloro para piscinas” clasificado en la posición arancelaria 2828.90.90.00 compuesto de hipoclorito de calcio comercial (65% activo y 35% inertes) si bien una de las propiedades de este producto es ser desinfectante, no es la única.
- c- En el proceso de aforo el funcionario aduanero reclasifica la mercancía en la posición 3808.40.9000 como desinfectante preparado, basado en el análisis del Laboratorio N° 2328 del 23 de octubre de 1996.
- d- El producto se vende tanto en tambores de 45 kilos, tal y como viene de fábrica como también reempacado en envases de 2, 4, 10 y 20 kilos, esto para demostrar que la importación que se hace es al por mayor.
- e- Que de conformidad con las Notas Explicativas del Sistema Armonizado y en aplicación de la Regla General de Clasificación 1 la mercancía debe clasificarse en la partida específica 28.28 y no en la partida general 38.08 indicada por la Aduana. No procede aplicar la Nota Legal 2 de la Sección VI como indica la Dirección de Aduanas, ya que su presentación no es para la venta al por menor, sino en recipientes de tamaño económico de 45 Kg.
- f- Solicitan se verifique la correcta clasificación en la partida específica 28.28, se revise el dictamen del Laboratorio Aduanero tomando en cuenta el análisis del Laboratorio Lambda, se declare la nulidad de lo resuelto por la Aduana Central y se ordene el reintegro de lo pagado de más.

- VIII- La Administración Aduanera dicta la resolución RES-DV-061-97 del 28 de noviembre de 1997, elevando el expediente respectivo ante el Comité Arancelario, cita y emplaza a la parte para que haga valer sus derechos ante el superior en grado. (véase folios N° 75 a 77).
- IX- Mediante Auto N° 033-98 de fecha 11 de agosto de 1998, este Tribunal acogió el impedimento presentado por el Lic. Desiderio Soto Sequeira y lo tuvo separado del conocimiento del presente asunto, ordenándose gestionar lo relativo a su suplencia. Mediante Acuerdo Presidencial N° 80-H de fecha 26-11-98 se nombra al Lic. José Alberto Martínez Loría, como miembro suplente, por lo que a efectos de conocer del presente caso, se integra este Tribunal con el Lic. Martínez. (véase folios N° 78 a 84).
- X- En las presentes diligencias se han respetado las formalidades legales en la tramitación del recurso de apelación.

Redactan los Licenciados Céspedes Zamora y Reyes Vargas ; y ,

CONSIDERANDO:

Hechos Probados.

- I- A efectos de resolver, éste Tribunal tiene por probado lo siguiente : 1- En el asunto de marras al realizarse la determinación de la obligación tributaria, la Aduana Central realizó una variante en la declaración aduanera, la cual consistió en modificar la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria así como el porcentaje de los derechos aplicables, variante que se notificó al interesado en noviembre cinco de 1996, todo lo anterior consta en certificación de la declaración aduanera que corre a folio 7. 2- Que el recurrente presentó su reclamo contra lo actuado por la Aduana en diciembre 12 de 1996. (véase folio N° 1).

Admisibilidad del Recurso y el Reclamo.

II- Si bien el afectado calificó su gestión como un “reclamo”, se trata en la especie de un recurso, regulado en el artículo 198 de la L.G.A. Se desprende de lo actuado en expediente, que ni la Aduana ni la Dirección General de Aduanas, entraron a considerar si en la especie se cumplía o no con los requisitos de admisibilidad del recurso, de previo a entrar a conocer el fondo del asunto. En efecto, en primer término, debió la Administración evaluar si el presente recurso fue presentado dentro del plazo señalado en el artículo 198 de la L.G.A, a saber, dentro de los tres días siguientes al acto que emita la Aduana, en este caso la modificación de la determinación de la obligación tributaria contenida en la declaración aduanera con la que se tramitó el despacho respectivo, lo cual es fundamental y debe ser tomado en cuenta al momento de resolver el presente asunto.

III- Sobre la procedencia de tales reclamos y recursos, éste Tribunal en sentencia número 34 de octubre 13 de 1998 señaló:

“1.--Tanto la Aduana como la Dirección General de Aduanas no han entrado a conocer los argumentos del recurrente, al tener como requisito de admisibilidad del “reclamo” el plazo señalado en el artículo 198 de la Ley General de Aduanas y tener como presentado el mismo fuera del término de los tres días siguientes a la notificación del acto que emita la aduana, en este caso la declaración aduanera con la que se tramitó el despacho respectivo, elemento base para tomar en cuenta a la hora de la resolución del presente asunto.

2.--Parece existir una seria duda de interpretación acerca de cuándo es aplicable el artículo 198 y cuando el artículo 62 de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA). Por tal razón, primeramente como lo pretende el recurrente es necesario distinguir, cuando estamos en presencia de un reclamo y, cuando se trata de un recurso. El primero consiste de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio en “el hecho de acudir ante una autoridad para que reconozca a favor del reclamante o de terceros la existencia de un derecho” mientras que un recurso administrativo es “todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones...”, cuando el recurso es en sede administrativa los particulares lo pueden interponer contra las resoluciones o actos administrativos, ante el órgano que lo dicta. Así las cosas, tenemos que cuando nos sentimos agraviados por un acto de la administración que

nos causa efectos, existe toda una fase recursiva para impugnar la decisión de la administración, lo que puede devenir de una gestión o reclamo promovido por el administrado, o bien, de un acto oficioso de la Administración.

En ese mismo sentido, establece el autor Juan Carlos Casagne que en lo esencial, un recurso administrativo consiste en un acto de impugnación, de un acto o reglamento administrativo, que da lugar a un nuevo procedimiento. Y que las meras reclamaciones no son en sentido propio, medios para impugnar actos administrativos. Se trata, de articulaciones que pueden o no tener contenido jurídico que presenta el administrado en ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades administrativas, tendientes a obtener un acto favorable o, provocar el ejercicio de la potestad revocatoria ex officio, que en algunos supuestos puede ejercer la Administración, aún cuando no hubiera un recurso administrativo formalmente planteado.

Por lo anterior, es preciso establecer cuál es la aplicación normativa del reclamo planteado por el recurrente ante la aduana y, si efectivamente se da un error en la clasificación arancelaria de la mercancía que justifique el mismo.

Procedencia de la aplicación del artículo 198 de la Ley General de Aduanas :

3.--Señala Hector Escola, en su Tratado General de Procedimiento Administrativo sobre el proceso recursivo que, “el recurso es toda impugnación, en término, de un acto o reglamento administrativo que se dirige a obtener, del órgano emisor del acto, el superior jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado.” En ese sentido la Ley General de Aduanas en su Título VIII, Capítulo II sobre el “Trámite de la Fase Recursiva”, dispone para la impugnación de los actos de la aduana en el artículo 198 primer párrafo :

*“Notificado un acto final dictado por la aduana, **inclusive el resultado de la determinación tributaria**, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto podrán interponer el recurso de reconsideración y el de revisión jerárquico ante la aduana, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación.” (el resaltado no es de texto)*

En consecuencia, si uno de los sujetos legitimados por la norma, se siente afectado por el acto emitido por la aduana puede impugnarlo, por existir una disconformidad, dando como resultando el inicio de un fase recursiva tendiente a que la Administración modifique o revoque el acto por ser contrario al ordenamiento, de conformidad con los argumentos y pruebas que estimen esclarecen el asunto y cuya afectación se evidencia generalmente en un perjuicio al destinatario del acto.

Bajo ese mismo orden de ideas, señalan los más connotados estudiosos del Derecho Administrativo, que el recurso administrativo es un acto jurídico y no un derecho. No debiendo confundirse, pues, con el derecho a recurrir como emanación conjunta del derecho de peticionar ante las autoridades, siendo además una la garantía de la defensa trasladada al plano administrativo, con su manifestación concretada en el acto por el cual se recurre. La verdadera naturaleza del recurso es la de un acto de derecho público, con su manifestación concretada en el acto por el cual se recurre. Por lo que la aplicación del artículo de cita tiene un alcance propio.

En el caso en estudio, tengamos presente dos elementos importantes, que nos permiten determinar sin lugar a duda que no estamos en presencia de un acto consentido, por parte del recurrente al no presentar en tiempo los recursos pertinentes, sino por el contrario en la reivindicación de un derecho a través de una reclamación, basado en el reconocimiento expreso que una norma jurídica faculta. Lo anterior por cuanto el recurrente presenta la declaración aduanera de importación definitiva, la cual está conforme con el ordenamiento jurídico aduanero, artículo 86 de la LGA que le impone al agente aduanero la responsabilidad de suministrar la información necesaria para determinar la obligación, como lo es la clasificación arancelaria de las mercancías a despachar y, por otra parte, no se presenta una discrepancia al momento del despacho que de base al inicio de una fase recursiva.

Es evidente que la disconformidad no surge por una reclasificación de la declaración por parte de la autoridad aduanera, sino por existir un error en la posición arancelaria, lo que genera un pago de más del sujeto pasivo de la obligación, en el monto de los tributos a cancelar, ya que la tarifa aplicada conforme lo declarado es mayor, por lo que se reclama la devolución de lo pagado de más. Misma situación que plantea la norma 62 de la LGA en el caso de haber cancelado una suma menor como consecuencia de un error o una incorrecta interpretación de la normativa arancelaria, facultando a la autoridad aduanera de oficio, a rectificar el error e iniciar el cobro por la diferencia insoluta. Generando en ambos casos la posibilidad de iniciar además un procedimiento administrativo tendiente a determinar si se cometió una infracción aduanera, con base en los presupuestos que el caso establezca.

Procedencia de la aplicación del artículo 62 de la Ley General de Aduanas :

4.--En el caso que nos ocupa, es claro que el apelante lo que pretendía era la restitución de un derecho a recuperar lo que considera ha pagado en exceso por un error a la hora de clasificar la mercancía y por ende de determinar la obligación tributaria aduanera en el despacho de los globos del importador / consignatario ZZZZ., al considerar que la tarifa que en realidad corresponde aplicar era menor. En ese sentido la Ley General de Aduanas recoge el debido equilibrio que debe existir cuando se determine

tanto por parte de la administración o bien del administrado un error en el cobro y pago de tributos objeto de una obligación existente, por un principio de justicia administrativa, en aplicación del principio de legalidad, en su artículo 62, que claramente indica :

“Prescribe en cuatro años la facultad de la autoridad aduanera para exigir el pago de los tributos que se hubiesen dejado de percibir, sus intereses y recargos de cualquier naturaleza. Prescribe en el mismo plazo la acción del sujeto pasivo para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza o solicitar el crédito respectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago.

Lo pagado para satisfacer una obligación tributaria aduanera prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado con conocimiento de la prescripción o sin él”

Ello significa que tanto la administración aduanera como el sujeto pasivo de la obligación, pueden rectificar los errores en la determinación y consecuente obligación, bajo los límites que la misma legislación le impone según sea el caso. La administración tributaria tiene como una de sus funciones realizar los cobros correctos de acuerdo con la normativa vigente para satisfacer el interés público, siendo uno de los fines previstos en la ley General de Aduanas conforme al artículo 6 (“Facultar la correcta percepción de los tributos...”). Así, como el sujeto obligado o sujeto pasivo de la obligación a que se le cobren los adeudos con apego a esa normativa. Por tal razón, no puede la administración cuando ha cobrado sumas de dinero en exceso ignorar el reclamo de la restitución de ese pago pues constituiría un enriquecimiento ilegítimo contrario al mismo interés público, al violentar el principio de legalidad, bajo el cual la administración está expresamente obligada a actuar.

Bajo ese mismo orden de ideas, resulta necesario dejar en forma precisa lo que constituye un pago en exceso por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, al cual le nace el correspondiente derecho de restitución de lo pagado de más, frente a lo que se conoce como enriquecimiento sin causa, por cuanto nos va a permitir tener claramente establecido cuándo debemos aplicar el artículo 62 de referida cita.

Señala la más connotada doctrina civilista que se entiende por enriquecimiento sin causa, aquel enriquecimiento que ha operado sin causa jurídica que lo legitime. Ello con base en el principio general de derecho, de arraigo en la conciencia social, reiterado por la doctrina y jurisprudencia, de que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de otro. Ese principio aplicable también al Derecho Público, tiene su fundamento en que la actuación administrativa no puede ir en detrimento del principio de

legalidad, principio constitucionalmente consagrado y de obligatorio acatamiento para la administración en general.

Basados en ese principio, tenemos que la Administración Tributaria no ejecuta un interés propio, sino que está ejecutando la ley, que define intereses generales, objetivamente definidos por ésta, por lo que el enriquecimiento sin causa tiene su base en el interés de que las relaciones entre el ente público y el sujeto pasivo, se desarrollen en el marco de la ley. Es claro que este principio tiene sus raíces en las relaciones existentes entre particulares, y cobra vigencia cuando la actuación administrativa lo recoge en el ordenamiento jurídico aduanero (artículo 62), que vinculan el quehacer cotidiano de la administración, especialmente cuando se constituye en un órgano recaudador.

En ese sentido, cuando se analiza la naturaleza del enriquecimiento indebido desde el punto de vista del Derecho Tributario, se toman dos premisas básicas : la existencia de la no obligación de realizar el pago (por existir un derecho exonerativo por ejemplo), o por la existencia de un error en la determinación (lo que supone diversos motivos), lo que puede incidir en el quantum de la obligación y no precisamente en su nacimiento. Siendo en ambas situaciones obligación de la administración reconocer o restituir lo pagado de más, en virtud de su obligación de actuar en apego al ordenamiento jurídico. En ese sentido señala Cesar García Novoa en el Libro “La Devolución de los Ingresos Tributarios Indebidos” que **“el enriquecimiento sin causa no deberá entenderse en relación a la obligación tributaria, como la imposibilidad de que la administración obtenga cuanto le sea posible de los particulares, debiendo limitarse a obtener la cantidad señalada por la ley”**. Queriendo decir que el que ha pagado indebidamente y pruebe la ilegalidad del pago, tiene derecho a la devolución de lo pagado de más. De allí que encontramos dicha justificación en la relación del citado artículo 62, el artículo 52 de la LGA cuando refiere a la relación jurídica aduanera

“... constituida por los deberes y las obligaciones de carácter tributario aduanero, que surjan entre el Estado, los particulares y otros entes públicos, como consecuencia de las entradas y salidas, potenciales o efectivas de mercancías, del territorio aduanero.” (el resaltado no es del texto)

y las normas arancelarias que contienen los presupuestos fácticos para determinar cuál es la tarifa aplicable de una determinada mercancía de acuerdo a su naturaleza, función, uso o composición.

Así, en el caso en estudio cuando el recurrente refiere a que por un error clasifica en otra posición arancelaria la mercancía, la cual tenía una afectación tarifaria menor y por consecuencia realizó un pago de

más, si, efectivamente se comprueba que se aplicó erróneamente esa tarifa, surge el derecho de restitución, ya que, uno de los fines que debe perseguir la Administración en última instancia es evitar una aplicación equivocada de la normativa arancelaria, que dispone el monto del tributo a pagar. Doctrinariamente se define que este tipo de error, en los casos en que el contribuyente puede aplicar una autodeterminación sujeta a revisión o ajuste por la autoridad tributaria, no deviene de la formación de la obligación como expresión de la voluntad para el pago del tributo, sino en una incorrecta aplicación del presupuesto legal, o bien un error en la interpretación de la norma que da base al cobro y en consecuencia se reconoce el derecho de restitución de lo pagado.

Por consiguiente en criterio de este Tribunal, le es aplicable el artículo 62 de la LGA al caso en estudio y si con base en lo indicado se determina la existencia de un error en la clasificación arancelaria generado por la tarifa aplicable, en un pago en exceso de la obligación tributaria aduanera, deberá la Administración devolver la suma correspondiente.”

- IV- En resumen, el artículo 198 indicado, expresamente establece que contra la determinación de la obligación tributaria realizada por la Aduana, procede los recursos de reconsideración y revisión jerárquica, en tanto ello se realice dentro del plazo estipulado. De no hacerse uso de dichos recursos en tiempo el acto deviene en firme y por ende irrecurrible a través de los recursos ordinarios y ello es precisamente lo correspondiente al caso en exámen, el cual resulta firme no solo al no impugnarse lo dispuesto si no expresamente aceptarse tal modificación.

- V- Resulta evidente que en el caso de examen estamos en presencia de un acto consentido cuyos efectos conllevan la caducidad del proceso recursivo como la perdida por renuncia del derecho a reclamar la revisión de lo actuado por otros medios. Conforme se tiene por demostrado, el interesado presenta su inconformidad más de un mes después de que se notificara el adeudo, por lo cual su reclamación resulta inadmisibile pues el acto se tiene por firme ante el consentimiento del interesado en virtud del no ejercicio en tiempo de los recursos procedentes y así debió declararlo la Aduana. Ha sido reiterado por la más connotada doctrina que los pronunciamientos en

los procesos recursivos que culminan con un sentencia deben responder a un orden lógico procesal, según el cual sólo cabe decidir sobre el fondo dentro del marco de un proceso admisible y admitido. Este orden lógico obliga en primer lugar a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, sólo una vez decidida ésta de forma afirmativa puede entrarse en el fondo del asunto y pronunciar la estimación o desestimación del recurso.

Se ha considerado de manera inequívoca por la doctrina que los plazos para la interposición de los recursos son de caducidad, lo que ha sido reconocido por la mayoría de legislaciones, siendo nuestro caso particular el artículo 198 de la Ley General de Aduanas antes citado y el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública que reza : ***“Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto.”...***, para aquellos casos en que no existe norma expresa.

Asimismo, refuerza lo anterior lo que expresamente señala el artículo 21 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ***“1. No se admitirá la acción contencioso administrativa respecto de: a) Los actos consentidos expresamente o por no haber sido recurridos en tiempo y forma, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y ...”*** . Aunado a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda que sobre el tema igualmente reseña : ***“La figura del acto consentido se da, cuando los actos no son recurridos en tiempo y forma, sin que se utilicen en su contra, todos los medios de impugnación que ofrece el ordenamiento jurídico, convirtiéndose así, en inimpugnables y en razón del cual, la acción contencioso administrativa en relación con ellos, se torna***

inadmisibles de conformidad con lo preceptuado en el ordinal 21.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, habida cuenta de que adquieren firmeza. Con el objeto de que no se presente esa situación, es necesario el agotamiento de la vía administrativa, como requisito sine qua non para dar cabida a la acción contencioso administrativa. La citada Ley Reguladora en su numeral 31.2 establece, que ese trámite se entiende cumplido cuando se haga uso , en tiempo y forma, de todos los recursos administrativos que tuviere el negocio o bien, cuando la ley lo disponga . (...)”
Resolución N°643 de las 12 :00 hrs del 10 de julio de 1992.

- VI- En virtud de lo expuesto, estima este Tribunal que estamos en presencia de un acto firme, consentido por la parte al acaecer la caducidad de la acción por expiración del plazo y consecuentemente decaimiento de su derecho y no puede obviar los presupuestos procesales que constituyen requisitos de orden público, cuya ausencia impiden a este Tribunal a pronunciarse sobre los aspectos de fondo debatidos por la parte.

POR TANTO:

De conformidad con el artículo 91 del Código Aduanero Centroamericano, los artículos 198, 204, 205 y 208 de la Ley General de Aduanas y 351 de Ley General de Administración Pública, este Tribunal declara mal admitido el recurso por estar firme la determinación tributaria contenida en la declaración aduanera número 307126 del 05 de noviembre de 1996 de la Aduana Central. Remítase el expediente al ad quo para lo que corresponda.

Notifíquese a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales y al recurrente en la Agencia Aduanal Arce Campos, oficinas centrales, 450 metros oeste de la Cruz Roja Costarricense, San José.

Lic. Alejandra Céspedes Zamora

Lic. Dick Reyes Vargas

Lic. Luis Gómez Sánchez

Lic. Elizabeth Barrantes Coto

Lic. Shirley Contreras Briceño

Lic. José A. Martínez Loría

**Lic. Loretta Rodríguez Muñoz
Presidente**

